



Barranquilla, agosto de 2024.

SEÑORA:

Dra. MYRIAM MELISSA PASTRANA CALLE

JUZGADO CATORCE (14º) CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

E.

S.

D.

Ref: Verbal de Responsabilidad Civil Rad. 08-001-31-53-014-2024-00146-00

Demandante: HERNANDO ENRIQUE MEZA ORTIZ y Otros.

Demandado: E.P.S. SURAMERICANA - E.P.S. SURA Nit. 800.088.702-2 - CLÍNICA PORTOAZUL S.A. - CPA Nit. 900.248.882-1 - JUAN FELIPE ARIAS BLANCO CC. 91.524.465 (Médico Tratante)

Asunto: Recurso de Reposición y, en subsidio, Apelación.

Estimada Sra. Juez.

JHAROL JAIR SUAREZ PEREZ, abogado titulado y en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.129.534.006** expedida en Barranquilla, portador de la tarjeta profesional de abogados No. **344.542** del Honorable Consejo Superior de la Judicatura y correo electrónico debidamente inscripto en la RNA jharolsuarezabogado@gmail.com, asociado y suplente de la firma **AB SIERRA & ASOCIADOS DERECHO CORPORATIVO S.A.S.**, identificada con NIT. No. **901-711.801-2**, correo absierraabogadoscorp@gmail.com, representada legalmente por el Dr. **ABDON ALBERTO SIERRA GUTIERREZ**, identificado con C.C. No. **9.131.373** de Magangué - Bolívar, que funge como representante judicial del médico **JUAN FELIPE ARIAS BLANCO**, identificado con C.C. No. **91.524.465**, demandado dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito y estando dentro del termino para ello, concurre a su digno despacho a fin de interponer Recurso de Reposición y, en subsidio, Apelación en contra del auto de calendas 24 de julio de 2024, mediante el cual, se dio admisión a la demanda de la referencia conforme a los siguientes postulados facticos y jurídicos:

Acotación previa:

Sea lo primero advertir que los demandantes no han surtido la debida notificación a mi mandante el Sr. JUAN FELIPE ARIAS BLANCO, quien también es demandado dentro de la presente litis y, pese a haberse notificado debidamente a los otros demandados SURA EPS Y CLINICA PORTO AZUL, no se ha obrado de conformidad respecto de mí poderdante, razón por la cual se pide tenerle notificado por conducta concluyente a partir de la presentación del presente escrito y, en consecuencia, se solicita dar trámite de rigor al recurso.

HECHOS:

1. Cursa en su despacho un proceso declarativo de responsabilidad civil médica instaurado por los señores HERNANDO MEZA ORTIZ y otros en contra de EPS SURAMERICANA EPS SURA; CLINICA PORTOAZUL S.A y el medico JUAN FELIPE ARIAS BLANCO, cuya radicación es 8-001-31-53-014-2024-00146-00.
2. La anterior demanda fue admitida mediante auto de fecha del 24 de julio de 2024 y a la fecha no existe notificación de la demanda y su auto admisorio a mi prohijado, el médico **JUAN FELIPE ARIAS BLANCO**, conforme se dispone en el artículo 291 del C.G.P. y la ley 2213 de 2022.



3. Los artículos 7 y 68 de la Ley 2220 de 2022 expresan que, en tratándose de asuntos conciliables en materia civil, como lo es el presente, se debe intentar como presupuesto de procedibilidad la audiencia de conciliación extrajudicial y en derecho entre las partes que intervendrán en el litigio judicial, so pena de inadmisión de la demanda.
4. A su turno, la Ley 2213 de 2022 imponía al demandante la obligación del envío de la demanda y sus anexos a los demandados de manera simultánea a su envío a la administración de justicia, también previendo como sanción al incumplido de estas cargas la inadmisión de la demanda.
5. Sin embargo, esas mismas normas, excepcionan de ambos presupuestos procesales (conciliación y notificación inmediata) al demandante siempre que solicite con el libelo genitor el decreto de medidas cautelares que resulten procedentes, pertinentes y justificadas.
6. Procurando encajar en esas excepciones a las cargas procesales previas y así evitar la inadmisión de su demanda, el accionante, con fundamento en el literal (a) del artículo 590 del CGP, solicitó en el cuerpo de la demanda como medidas cautelares las siguientes:
 - a. Oficiar a las autoridades de inmigración para que eviten la salida del país del galeno JUAN FELIPE ARIAS BLANCO.
 - b. Que se decrete la inscripción de la demanda en el registro de existencia y representación de Cámara de Comercio de las sociedades demandadas.
7. En el auto admisorio de la demanda, se deniega la primera de las cautelas solicitadas, por ser abiertamente improcedente y no cumplir el demandante con su carga jurídica de justificar, frente a los principios constitucionales, la razonabilidad de la misma.

Respecto de la segunda, le ordena al demandante que preste caución por la suma de \$ 190.000.000 para determinar su procedente decreto, para lo que le concede al actor un término de 20 días para aportar la constancia de la misma.

Obsérvese, que el fundamento de la solicitud y posible decreto de la cautela se apoya en el literal (a) del artículo 590 del CGP que a su letra expresa:

a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual"

Como puede verse, el C.G.P. manteniendo la línea ideológica y jurídica del C.P.C. expresamente permite el decreto de medidas cautelares de inscripción de demanda en bienes sujetos a registro y secuestro de bienes muebles en aquellos procesos que de una u otra forma la pretensión esté ligada a la discusión de derechos reales, especialmente el de dominio o cualquier otro real principal.



En el presente caso se busca que el Juez en su sentencia declare la existencia de una posible obligación en cabeza de los demandados y, acorde con el artículo 665 del C.C., obligación es la relación entre dos personas y no respecto de derechos reales, habida cuenta que cuando se habla de obligación estamos frente a un derecho personal, totalmente ajeno a debate sobre dominio y cualquier derecho real principal o no.

Por ello, en esta clase de procesos, no proceden las cautelas pedidas por el demandante, ello, desprendido de un mero análisis exegético de la norma.

Segundo, el nombre de la persona jurídica, que igual que la persona natural, constituye un atributo de la persona y por tanto tiene carácter inalienable, imprescriptible y inembargable, por lo que igualmente es una cautela improcedente e ilegal. Así lo ha expresado en oportunidades varias la jurisprudencia de los tribunales del país.

Finalmente, para cerrar el abuso e intento de fraude a que acuden algunos profesionales del derecho para aplicar a las excepciones de marras, la jurisprudencia ha asumido la línea jurídica sistemática que impone aceptar que, para evitar el soslayamiento de la conciliación como presupuesto para acudir a la acción judicial, las medidas cautelares que se pidan en la demanda deben ser igualmente procedente y legales, empero las aquí solicitadas son abiertamente improcedente e ilegales.

Amén de lo anterior, también resultan injustificadas como quiera que el apoderado no da las explicaciones constitucionales que recoge el literal C del artículo 590 del CHGP, en caso de que quisiera encuadrarlas por el sendero de las medidas cautelares innominadas, por lo que igualmente conduce al rechazo de las cautelas irregularmente solicitadas.

Consecuencia del razonamiento anterior, al no cumplir la solicitud de medidas cautelares los requisitos de forma y mucho menos de procedencia sustantiva, ha de concluirse que su único objetivo era evitar la conciliación como presupuesto para acudir a la jurisdicción y cumplir con su carga de enviar copia de la demanda a los sujetos pasivos de ésta, que al no cumplirlo y tampoco encuadrarse con las excepciones referidas ut-supra, obliga al despacho a efectuar un control de legalidad sobre la admisión de la demanda y decretar su inadmisión hasta tanto cumpla o aporte copia del acta de no conciliación con los demandados.

Anexos:

- Se anexa copia de la providencia del Tribunal Superior de Bogotá que recoge la tesis aquí defendida
- Copia del poder para actuar

PETICION

Que en providencia que desate este recurso se ordene:

- La revocación del auto admisorio de la demanda de fecha 24 de julio de 2020 por no haber cumplido el demandante con el presupuesto de prejudicialidad de conciliación y de enviar la demanda y sus anexos a los demandados al momento de enviar la demanda a la administración de justicia, para que en su lugar se decrete su inadmisión y eventual rechazo, en caso de incumplimiento.
- Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante.



AB SIERRA & ASOCIADOS

NT. No. 901.711.801-2

Carrera 57 No. 99A – 65 piso 7 Ofi. 711 Ed. Torres del Atlántico.

E-mail: absierraabogadoscorp@gmail.com

AB SIERRA & ASOCIADOS
Derecho Corporativo

JHAROL J. SUAREZ
C.C. No. 1.129.534.006
T.P. No. 344.542
E-mail: jharolsuarezabogado@gmail.com
Abogado suplente.



AB SIERRA & ASOCIADOS
Derecho Corporativo